

Lectura de las encuestas prerreferendarias

La campaña del revocatorio del mandato presidencial, que consumió recientemente la atención pública, fue curiosa no solamente por la primicia del propio medio de participación, sino también por la hegemonía que instauraron las encuestas en una inapetente cruzada electoral.

Ciertamente, ya no es excepcional el papel de las encuestas en una campaña electoral de ahora. Asumen un protagonismo natural en tiempo de votación, básicamente por el encanto que despiertan en políticos, periodistas y ciudadanos en cuanto al avance de la carrera electoral. No obstante, las encuestas pueden exceder su figuración cuando hechizan sustancialmente el debate más allá de la inocente rutina informativa. Sin embargo, la dinámica del revocatorio no es comparable con experiencias electorales anteriores, no sólo por su novedad, sino también por el contexto en el cual se desarrolla el proceso. Supone, concluyentemente, una ruptura con el estilo tradicional de las votaciones en Venezuela.

La víspera electoral fue determinante intervenida por resultados de mediciones de intención de voto en el referendo de revocación presidencial, en el delineamiento de una inquietante controversia que, presumiblemente, condicionaron de alguna manera la disposición de los electores.

El caótico orden social y político, que prefijó el desenlace en una prueba electoral, fue precedentemente poniendo a las encuestas en desventaja descriptiva y en una prácticamente imposibilidad explicativa. La perturbación, de génesis combinada, atentaba terminantemente en desmedro de la limpieza técnica de la investigación agregada de la opinión pública.

Los porcentajes que se perfilaron, previamente a la convocatoria oficial del revocatorio presidencial, lucieron en contradicción con un tanteo acabado de la circunstancia social y política. Las encuestas fueron entrando en una inconveniente ruta de prostitución pública que terminaba debilitando su fuerza reveladora.

Una señal dramática de alteración de la gestión de las encuestas fue la atrevida

Desde su aparición como instrumento para conocer la orientación de la opinión pública, las encuestas han causado grandes expectativas tanto en los electores como en los políticos que aspiran a un determinado cargo, ya que su correcta realización es un medio fiable para predecir los resultados de un proceso electoral. En el específico caso del pasado Referéndum Revocatorio, apunta Alfredo Rojas que la dramática alteración de la gestión de las encuestas provocó un debilitamiento de su fuerza reveladora. Es enfático el autor al advertir que el Referéndum guardaba características y contextos muy distintos a cualquier otro proceso anterior. Finalmente, advierte la necesidad de que tanto gobierno como oposición se avoquen a las responsabilidades compartidas.

■ Alfredo Rojas

implicación de encuestadores en la agenda política en un desbordamiento de su apreciación técnica. Se involucraron tan abiertamente que las firmas más conocidas fueron en sí mismas un asunto de debate público. Eso supuso, inevitablemente, un condicionamiento embarazosamente manejable en la aplicación de cuestionarios.

Pero, además, es previsible un procedimiento ligero en el tratamiento de asun-

tos, que, aunque siendo de prominente presencia en la agenda mediática, no parecieran disponer del soporte cognitivo suficiente como para garantizar la precisión de los resultados de las encuestas.

Llegada la campaña electoral del referendo de revocación del mandato presidencial devino un desconcierto más patético a propósito de un abrupto bajo perfil que tomaron discrecionalmente las encuestadoras que anteriormente lucieron en los medios de comunicación cuando los números apuntaban a la oposición, pero que inoportunamente callaron el repunte de la preferencia por Chávez en un momento crucial por rigurosamente electoral. Esto no despertó inicialmente sólo la sospecha de los votantes, sino que incuestionablemente distorsionó la percepción del cuadro electoral, y sin duda que también la voluntad última de los electores.

El ajuste —o el salto— que repentina, pero explícitamente, comenzó a desplegar el chavismo, tras la oficialización de la convocatoria del revocatorio presidencial, y a partir de un reacomodo del capital electoral de Chávez, se perfilaba categórico —un recorrido ganado audazmente— en el marco de una campaña electoral que dificultosamente iba a lograr agotar la fase de identificación, es decir, la etapa elementalmente emocional en la cual la personalización es una propiedad insoslayable.

El oficialismo, alentado por los porcentajes que se colaron en la agenda pública, glorificó afanosamente las encuestas durante el curso de la campaña electoral como es natural en el caso de los favorecidos por los números. La oposición, contrapuestamente, desmereció sus resultados cuando alcanzó a abordar la cuestión, y a partir del supuesto del voto oculto, difícilmente descifrable por las aproximaciones cuantitativas a la opinión pública, puso en duda la capacidad reveladora de los instrumentos que antes exaltó en mejor momento.

A pesar del panorama oscuro que rodeó la práctica de las encuestas, es prudente advertir que fueron un recurso provechoso en la descripción de la distribución de la disposición de voto en el referendo del 15 de agosto. Los resultados que

consiguieron con sus estudios las consultoras tradicionales del mercado venezolano, y que se pudieron conocer a pesar del empeño arbitrario por limitar su difusión, así como los porcentajes que mostraron empresas foráneas de investigación de opinión pública y algunas del ámbito nacional que se abren paso trabajando por más reputación, dieron arriba, y definiendo una tendencia ascendente, a la opción del No en el revocatorio presidencial, pero es oportuno advertir que la diferencia que asomaron nunca vislumbró la que reportan los resultados oficiales que proclamó el Consejo Nacional Electoral. Una separación mayor a 10 ó 12 puntos parecía extravagante en razón de la circunstancia de polarización política. Incluso a veces la distancia entre las opciones que competían en el referendo no era superior al doble del error muestral y de este modo quedaba negada cualquier pretensión predictiva.

De modo que las investigaciones preelectorales de la opinión pública fueron capaces de anticipar el triunfo de la alternativa chavista en el referendo revocatorio presidencial. Este movimiento de los porcentajes a favor del No obedeció, primariamente, a un efecto resorte que provocó Chávez, el mismo día del anuncio oficial del CNE de la procedencia de la convocatoria del revocatorio en su militancia, que no creyó posible que la oposición alcanzaría finalmente el cupo de firmas requeridas para la solicitud. Esta audacia apuntó a drenar el descontento doméstico y a volcar la esperable frustración en una oportunidad que también llegó a un porcentaje de electores que permanecía a la expectativa de la contienda, o que en las encuestas se expresaba contrariamente al referendo pero porque en el fondo eran un grupo de partidarios del oficialismo. La imagen de Chávez, duramente advertida públicamente como autoritaria y/o dictatorial, se desinfló con la aceptación de la medición electoral, y esto conllevó rápidamente a una percepción de demócrata que desubicó la perspectiva opositora, y además levantó una visión favorable internacionalmente que también es probable que alimentara un marco de evaluación favorable del chavismo.

Por otro lado, los estudios de opinión pública que registraron la recuperación oficialista, también parecen haber recogido el efecto generado por el despliegue de una intensa campaña electoral por la ratificación del mandato presidencial, que no solamente fue raudamente emprendida por Chávez, sino que en su desarrollo su-

RESULTADO ESPERADO ¿CUÁL OPCIÓN CREE QUE GANARÁ?

	Resultados oficiales CNE	HINTERLACES 31 julio-8 agosto n=1300	EVANS MCDONOUGH COMPANY VARIANZAS OPINIÓN 4-8 agosto n=2000	CONSULTORES 21 22-31 julio n=1500
No	59,25%	63%	53%	52,6%
Sí	40,74%	30%	32%	41,3%
NS-NC		7%	15%	6,1%
DIFERENCIA	18,71	33	21	11,3

pero en presencia, mensaje y organización a la que propuso la oposición, que incluso tuvo, fatalmente, que ajustar su estrategia en medio de la misma marcha de la campaña. El desbalance publicitario y de movilización, apuntado por una disponibilidad financiera extraordinaria por parte del oficialismo, que convirtió la mínima tarea de gobierno en promoción electoral, no pudo ser superado por la oposición, que ni siquiera logró el requisito básico de mercadeo político de sobreponerse a un mensaje múltiple e impersonal —tremendamente contraproducente en el perfil tradicional del electorado venezolano—.

De manera que la oposición no parece haber captado la disposición sobre todo de los electores indecisos, que según los registros de opinión pública mostraban una inclinación conveniente a la revocación del mandato presidencial si llegaban a concretar su voto, y la suma que obtuvo, según los resultados oficiales del CNE, se explican nada más por el carácter de automotivación de este grueso de disidentes —el elector convencido no necesita más que la oportunidad de expresar su voluntad. Y a los indecisos parecía que era clave el mensaje, pero definitivamente no suficiente para satisfacer su demanda emotiva. La sensación de mayoría afecta indiscutiblemente una dinámica electoral de indecisos. Así, entra en escena la predisposición de un elector a inclinarse hacia el ganador. Por esto el uso proselitista de las encuestas repunta en condiciones de indefinición. Además, el clima de triunfalismo se dirige a quebrar la voluntad del adversario y esto ocasiona no menos impacto.

Pero inclusive es posible considerar una migración de votantes del oposicionismo blando al chavismo en el momento de definición, y este préstamo, que necesitaría renegociarse con buena acción de gobierno para la elección presidencial del 2006, responde al doble efecto del arrastre del liderazgo de Chávez y el impacto conceptual de las misiones sociales.

En una campaña característicamente

propicia para la personalización, y aunque teóricamente no se trataba de un disputa con candidatos, el peso del liderazgo de Chávez fue sugiriendo una sensación de vacío en la dirigencia opositora, que también fue torpe en el afán de marcar una diferencia programática. El empeño de mantener la visión de Chávez versus Chávez probablemente no resultó suficiente a un votante tremendamente presidencialista y notablemente acostumbrado a la concreción en lo electoral.

El alcance de las misiones sociales del gobierno es más conceptual que material, porque más que atender a la cobertura de beneficiarios de la obra gubernamental, se aprecian perceptivamente como el convencimiento de que el chavismo toma en cuenta a los pobres, se preocupa y trata de ayudar.

Innegablemente que el chavismo ha logrado, en este sentido, construir un enlace afectivo con la mayoría de los votantes venezolanos a través del arraigo gramatical y alegórico que ha calado en el imaginario colectivo. La eficacia político-electoral del oficialismo se basa en una acertada interpretación de la distribución socioelectoral de los venezolanos, y esto ha retroalimentado un poderoso liderazgo y un concreto apoyo popular.

TRIPLE COMPOSICIÓN

Las encuestas prerenferendarias advirtieron una tendencia creciente de la intención de voto chavista en el revocatorio presidencial, pero el ritmo de ascenso no prefiguraba una diferencia abierta entre las dos opciones en los resultados definitivos. Tampoco un reacomodo de los votantes declarados indecisos, que mayoritariamente indicaban una potencialidad favorable a la oposición, se mostraba capaz de sostener una distancia prominente entre la alternativa ganadora y la derrotada.

De forma que la diferencia de casi 20 puntos que reportaron los resultados ofi-

	Resultados oficiales CNE	EVANS MCDONOUGH COMPANY / VARIANZAS OPINIÓN 4-8 agosto n=2000,	HINTERLACES 31 julio-8 agosto n=1300,	HINTERLACES 3-18 julio n=1500	ALFREDO KELLER Y ASOCIADOS 14 julio-1 julio n=1200	ALFREDO KELLER Y ASOCIADOS 2-6 agosto n=1000	EVANS MCDONOUGH COMPANY / VARIANZAS OPINIÓN 18-22 julio n=2000	CONSULTORES 21 22-31 julio n=1500	DATANÁLISIS 14 julio-2 agosto n=1300	GREENBERG QUILAN ROSNER RESEARCH 12-17 junio n=2000
No	59,25%	50%	53%	51%	45%	48%	49%	51,5%	47,5%	49%
Si	40,74%	38%	41%	40%	34%	38%	41%	45,2%	42,3%	44%
Indecisos/ NS-NC		12%	6%	9%	21%	14%	11%	3,3%	10,2%	
DIFERENCIA	18,71	12	12	11	11	10	8	6,3	5,2	5

ciales del CNE no encuentran explicación en la mera aproximación cuantitativa a la opinión pública durante la campaña electoral. Es así como es preciso apelar al análisis extraprocedimental de estos estudios, en el ánimo de justificar la brecha entre las opciones dentro de la perspectiva de una relativa regularidad del proceso, y sin caer en la hipótesis del fraude en cuanto a la intención de la voluntad de los electores.

La cobertura de una encuesta es un factor crucial. Se refiere principal, pero no únicamente, al alcance numérico de la muestra. Pero esta no es una cuestión puramente cuantitativa. De modo que en el caso de las encuestas electorales, que consideran la población votante —la plenamente habilitada para sufragar, se trata no exclusivamente de la sumatoria de inscritos en el registro electoral, sino que también cuenta el perfil cualitativo —la base de datos— de la distribución geográfica y socioeconómica de los votantes.

De forma que la distribución electoral es de triple composición: la cantidad de votantes debidamente inscritos, pero también considera la disposición geográfica y terminantemente la ubicación por estratos socioeconómicos de los electores. Esto quiere decir que el registro electoral debe considerarse como una composición agregada y cualitativa. Esta aproximación integral es vital en el propósito de conseguir claridad explicativa de un ciclo electoral.

De esta construcción analítica se desprende el conjunto de perfiles electorales que distinguen —y explican— tendencias particulares de los votantes. Esto es fundamental desde el punto de vista estratégico-electoral, pero también imprescindible para la interpretación de los resultados de las votaciones. Precisamente el caso del referendo revocatorio presidencial exige una lectura desde esta óptica.

Técnicamente es absolutamente imprescindible considerar, primariamente, el impacto de la alteración brusca del padrón electoral como parte de una audaz maniobra oficialista. Es prudente examinar el

crecimiento del registro electoral, no solamente como un número mayor de inscritos, sino, sobre todo, desde la perspectiva cualitativa.

La modalidad de variación del registro electoral no fue tradicional. No se trataba de la habitual incorporación de nuevos inscritos por cumplimiento de la mayoría de edad, sino que a partir de un plan de cédulación masiva se habilitó a un grueso de ciudadanos invisibles —por falta de identificación oficial—, y casi enteramente de los sectores más pobres del país, que permanecían al margen del derecho al sufragio. Esto es estimable desde el sentido democrático siempre que el proceso esté libre de irregularidades no admisibles. Lo cierto es que este proceso infló la potencialidad del chavismo —además comprometida por el dato de la identificación— en los estratos socioeconómicos bajos que concentran el grueso de la población votante.

Así surge la disparidad subjetiva que sienten algunos electores, tras el referendo de revocación del mandato presidencial, que creyeron que la opción derrotada era la mayoritaria a partir de una mera evaluación aislada de su alrededor. Particularmente una parte de los opositores alimentó, durante la campaña electoral, una expectativa de triunfo que se autoreforzaba a partir de la reducida percepción de su entorno básico.

Los seguidores de las encuestas esperan siempre que se acerquen a los resultados oficiales, pero si nominalmente se diferencian, no siempre las tendencias son contradictorias. En tiempo electoral, el ciudadano común siente, con respecto a los resultados que reportan las encuestas, que a veces contrastan con la tendencia que percibe de la calle. Sin embargo, el discernimiento de un elector aislado, que se sustenta en una proyección de su percepción individual o en compartir su opinión con unos pocos pares que le rodean, no puede rivalizar con el aporte generalizado que puede brindar una encuesta con rigurosidad científica. Inclusive, las dis-

torsiones que generan la complejidad de las condiciones políticas, sociales y económicas, que ciertamente limitan la capacidad descriptiva de las encuestas, no desmerecen el aporte revelador de estas herramientas de investigación. Es prudente reconocer que en un clima de extrema polarización y/o de contaminación social y política, la presión puede conducir a un ocultamiento o falseamiento de las opiniones. Pero primariamente esto no es suficiente para proyectar un triunfo o cambiar una tendencia, y el retraimiento democrático contrasta con la voluntad de participación y movilización en un momento caliente como el que precedió al 15 de agosto.

De manera que la distribución de composición electoral, demográfica y socioeconómica, que se perfiló en razón de la variación del padrón de votantes, es capaz de explicar los resultados oficiales del referendo del 15 de agosto que dieron ganadora a la opción del No. La premisa se resume en que donde viven más venezolanos, que es en los sectores pobres, y por lo tanto donde votan más electores, ganó abiertamente el No, y con récord de participación que, no obstante, no cubrió la expectativa que asomaron las encuestas preelectorales. Esto es difícilmente visible a través de la simplificación de los medios de comunicación. Por contraste, en los sectores de clases media y alta, de menor peso demográfico y por lo tanto electoral, se impuso la alternativa de revocación del mandato presidencial. No es extraño, en este orden, que un ciudadano ubicado en un centro de votación de estas zonas haya recogido la equivocada sensación de que su opción era la mayoritaria en todo el país. A este tipo de votante, de visión circunscrita a su entorno mínimo, le cuesta mucho comprender y más aún aceptar que, en efecto, los electores que tienen una opinión distinta, y en tal sentido sufragaron el 15 de agosto, constituyen, por razones de perfiles electorales, la mayoría. Ilustrativamente, a pesar de las parciales transmisiones televisivas de aquella jorna-

da, los centros de votación con colas de electores más prominentes, y consecuentemente las más resistentes y las últimas en agotarse entrada la madrugada del 16, se localizaron en las zonas populares.

No siempre las encuestas atienden a la distribución compuesta en su diseño muestral, y esto es una fuente innegable de sesgo en sus resultados. Si se desobedece la proporcionalidad de las regiones, estados o localidades del país, o si se infla un particular estrato socioeconómico, por ejemplo, esto tiene inevitablemente un impacto perverso en los resultados. El perfil electoral se diferencia geográficamente y por niveles socioeconómicos. Esto remite a la vieja discusión sobre las entrevistas en barrios o zonas de difícil o riesgoso acceso donde se concentra el grueso de la población, mayoritariamente pobre, que soporta el peso electoral, y que obliga a los estudios a ajustar proporcionalmente el diseño muestral.

A partir del proceso revocatorio presidencial cobra vigor el delineamiento de una nueva cultura política-electoral de los venezolanos. No por casualidad el chavismo configuró una campaña eminentemente popular y/o masiva. La conquista del votante no implicaba, para el oficialismo, sólo el convencimiento -y la suma- a la causa, sino también dotar a los electores para la batalla. Y los recursos fueron tangibles: la cédula de identidad, la inscripción o la actualización en el registro electoral y una cuidada logística. El discurso chavista insistió en endosar política y electoralmente las reivindicaciones, no solamente materiales, sino sobre todo anímicas, de los sectores populares, y, de este modo, los pobres conjugan ahora en su marco evaluativo sus demandas de bienestar socioeconómico con las posibilidades de inclusión política y reconocimiento social.

Es posible argumentar que las investigaciones de opinión pública preelectorales no vislumbraron la diferencia que después resultó en el revocatorio, por haber trabajado sobre la base de una distribución de triple composición anterior o que fue variada. Así se debilita la facultad predictiva de estos instrumentos, dado que es oportuno recordar que el dato más elemental, que es prudente considerar en la evaluación de una encuesta, es la fecha. El precepto básico es que una encuesta es estática, es decir, capta el corte de un momento determinado. Paradójicamente, la realidad que deben recoger los estudios de opinión pública son, por decir menos, cambiante. Algunos sucesos pueden impactar los números de las encuestas, que

“

En una votación se juega la preservación o la conquista del poder a partir de una mayoría electoral, pero en el caso del agotador proceso del revocatorio presidencial, se trataba más bien de re-establecer un mínimo de coexistencia política

”

quedan desbordadas por los acontecimientos, incluso más allá de la dinámica propia de una campaña electoral y todavía más por el rasgo emocional que suele despuntar como ocurrió en la coyuntura refrendaria.

Es también un aspecto esencial la distribución territorial de la muestra. Es un inconveniente que algunos estudios ignoren la data censal tanto geográfica como socioeconómica. No es prudente que algunos estudios se limiten a unas pocas ciudades principales o más importantes porque esto impide generalizar los resultados obtenidos.

POLÍTICA IRRESOLUTA

Las encuestas se ubican, por su naturaleza, en un plano técnico a pesar de que condicionan y, en algunas circunstancias como la del revocatorio presidencial, absorben el juego político. Por lo tanto, la perspectiva cuantitativa no agota el miramiento del proceso refrendario. Las encuestas promueven, indefectiblemente, el argumento de la mayoría. Esto es aun más palmario -y ciertamente admisible- en una campaña electoral, pero este razonamiento de la mayoría -formalmente democrático en su fundamentación- puede devenir, contradictoriamente, en un mecanismo de exclusión política. Este es el riesgo de una exaltación inadecuada de los números duros de forma agregada de la opinión pública.

Parece que los electores, que se volcaron extensivamente a votar en la convocatoria del referendo de revocación del man-

dato presidencial de Chávez, más que los dirigentes que promovieron la iniciativa y quienes la rindieron como una oportunidad de reelección, comprendieron que los resultados de la contienda reclamaban una lectura menos simple que la meramente técnica de determinar la imprecisa distribución de la preferencia de los votantes.

Claro que es inocultable que, objetivamente, en una votación se juega la preservación o la conquista del poder a partir de una mayoría electoral, pero en el caso del agotador proceso del revocatorio presidencial, se trataba más bien de re-establecer un mínimo de coexistencia política que recuperara la condición genuinamente democrática del orden interno en Venezuela.

La política en Venezuela fue progresivamente acorralada por el sectarismo, no solamente como intolerancia, sino también como incomunicación y más allá incluso alcanzando el desconocimiento mutuo. Este clima degenerativo se consumió prácticamente toda la voluntad política, y la redujo puramente a una insistente disputa por el control del poder. Así, todos los espacios de encuentro político cedieron ante una conflictividad rutinaria.

Lo público se volvió magnético, sin puentes, sin acercamiento, sin confianza, y menos posibilidades de acuerdo entre las partes que se comportaron como enemigos y no como naturales adversarios políticos. Cada lado, en lugar del natural carácter dialógico de la política y conflictivo de la democracia, se encerró en una visión excluyente, sin matices, en el más básico dualismo. Sin duda que en esta inapropiada perspectiva influyó trascendentalmente el discurso demarcatorio oficialista que paulatinamente fue también reflejado por la oposición.

La señal del 15 de agosto apuntaba claramente a promover, primariamente, el reconocimiento de los adversarios políticos como iguales que se deben respeto y tolerancia para lograr un mínimo de actuación conjunta de la sociedad organizada en los asuntos de interés compartido, construyendo consensos -aunque sean parciales- con sentido de sociedad política, a pesar de las diferencias que deben procesarse democráticamente, sin la imposición del poder o la voluntad de una de las partes que sostenga por la fuerza de una mayoría -visible o atribuida- pero siempre circunstancial. Ese reclamo de reconciliación trasciende cualquier formalidad, probablemente ni siquiera alcanza la ambición de un acuerdo o pacto político, sino al menos de una disposición de diálogo.

La promesa básica de la convocatoria refrendaria trazaba un avance en el re-establecimiento de la colectividad política independientemente de los resultados de la prueba electoral. Se trataba también de superar la visión simplificadora de que puede haber política partiendo lo público en dos partes irreconciliables –gobierno y oposición–, sin reglas institucionales y sin consideración de la disidencia recíproca.

Sin embargo, la comunidad política exige la voluntad del gobierno de incorporar a la oposición en los espacios de la agenda formal, y de una oposición dispuesta a cooperar lealmente en la solución de los problemas comunes. La visión de la disidencia, que fue la que por lógica perdió cuantitativamente en la votación, exige a la par una consideración cualitativa. De hecho, la oposición que resultó del revocatorio presidencial agrupa a una importante fuerza política, social, económica y cultural. De modo que si las partes no son capaces de formar una colectividad política no puede hablarse de un orden político, mucho menos democrático, y la agenda ciudadana lleva la peor parte por la insatisfacción de las demandas sociales.

Claro que la circunstancia venezolana revela un dilema en cuanto a la forma de construir una comunidad política. No cabe duda de que se vislumbra un salto cualitativo en la cultura política y electoral de los venezolanos. De hecho, la participación en el proceso revocatorio –incluyendo la etapa preelectoral– es un indicador incuestionable de la voluntad de los ciudadanos de involucrarse más directamente en los asuntos públicos. Esto determina la insuficiencia de un pacto de elites como fórmula de gobernabilidad democrática. Precisamente la Democracia piramidal, de minorías que pactaban el ordenamiento político y controlaban a la mayoría con la redistribución de recursos, ha sido condenada por los venezolanos. Por supuesto que en el extremo opuesto a la mera representación política aparece el riesgo de la recurrente oferta de una Democracia directa que puede devenir en un sentido únicamente utilitarista, que termina haciéndola perversa. El abuso de la Democracia directa puede degenerar en una aniquilación de las parcialidades a partir de la imposición tiránica de una mayoría, incluyendo prácticas políticas con ese ánimo de neutralización o anulación, que suponen la negación del otro.

De forma que interpretar –y canalizar– la necesidad democrática de los venezolanos en este momento coloca en una verdadera encrucijada a los dirigentes políticos.

La extrema polarización política debilitó tremendamente la diversidad social y política del país. Del lado opositor, por ejemplo, entraron forzosamente en una entidad suprapartidista circunstancial, sectores que lucían muy distintos. En el oficialismo, la aglutinación alrededor del único liderazgo personalista y carismático de Chávez acabó con cualquier vestigio de intermediación. Por eso es también tan primordial re-construir la política como oficio de restituir el orden de convivencia con base en el pluralismo social y político, esto es potenciar la diversidad sin reduccionismos que atrapen a las relaciones de poder en su sentido más elemental.

La circunstancia postrevocatorio sugiere que el proceso refrendario, como aprendizaje de convivencia política, no se ha agotado a pesar de que se concretó la votación del 15 de agosto y se considera oficialmente cerrado. Políticamente permanece pendiente la deuda de reacomodar la colectividad democrática. La dirigencia de oposición luce desplazada, y se ha generado una especie de vacío en la representación disidente, que, no obstante, plantea la oportunidad de que las elecciones de gobernadores y de alcaldes, como un apéndice del proceso revocatorio presidencial, den lugar a una renovación del liderazgo opositor, y también la diversificación del oficialista, apuntalado por la elección popular, es decir, que se genere un resurgimiento de una dirigencia auténticamente democrática.

De esta forma, se perfila una fórmula de entendimiento que valora la democracia representativa, sin menoscabar la participación ciudadana que canaliza la energía democrática de los venezolanos, y de esta manera se entraría en una etapa de despolarización de la gestión de gobierno y de la actividad política en general, que es necesaria para que la natural diversidad democrática sostenga la colectividad política. Esto apunta además la eficiencia de la gerencia pública, elemento insoslayable de la gobernabilidad democrática. El liderazgo más cercano a la gente debe además, precisamente, incorporar a las comunidades en la solución de los problemas cotidianos. Se trata de la re-construcción de la sociedad política desde abajo.

Claro que esto requiere que las elecciones se desarrollen sin ninguna distorsión conceptual. Es preciso que no se perturbe la participación de los electores en la votación con una parálisis electoral voluntaria, a partir de un llamado directo o consecutivo a la abstención, o por desconfianza generalizada en el sistema electoral

venezolano. Tampoco es prudente que el oficialismo emprenda una campaña electoral que entube las elecciones de modo que no se mida la fuerza de los líderes regionales sino que se trate de dirigentes impuestos, que asumen los cargos con votos endosados por proyección del arraigo del liderazgo personalista de Chávez. Es apropiado también mencionar, en este sentido, que el afán unitario de la oposición tampoco debe encasillar forzosamente las normales diferencias de orientación en el ámbito de la disidencia por la oportunidad de triunfo. Así, el inicio de cierta recuperación institucional del país sería nuevamente pospuesto.

Este proceso necesita además que progresivamente se reacomode tanto el Estado como la sociedad organizada. Esto es que cada sector respete el espacio de los otros y que cada cual retorne a su rol. Esto no solamente incluye a los partidos políticos y a los medios de comunicación, sino también al resto de la sociedad organizada. La superposición de roles atenta contra la reposición de una colectividad política democrática. Un aspecto esencial es la recuperación de la vida parlamentaria como expresión genuina de la convivencia democrática, procesamiento de las diferencias políticas y conciliación de intereses discrepantes. Es preciso entender que es fundamental concebir a la política como una fórmula de coexistencia pacífica entre los adversarios políticos. Atrás debe quedar la creencia de que es posible que un sector aplaste al otro.

□ **Alfredo Rojas**
Político, periodista,
internacionalista y profesor en las
universidades Simón Bolívar
(USB), Central de Venezuela (UCV)
y Católica Andrés Bello (UCAB)